

Artículo

El Coste Social de la Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia

Noemí Pereda^{1,2} 

¹Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA), Universitat de Barcelona, España

²Instituto de Neurociencias (UBNeuro), Universitat de Barcelona, España

INFORMACIÓN

Recibido: Marzo 29, 2023

Aceptado: Junio 6, 2023

Palabras clave

Coste social
Capital humano
Violencia
Infancia
Victimología

RESUMEN

El objetivo de la presente revisión es analizar, mediante las estimaciones realizadas en estudios previos, los costes de atención médica, física y mental, las pérdidas de productividad, los costes para el sistema de protección infantil y los costes para el sistema de justicia penal de la violencia contra la infancia y la adolescencia, con especial énfasis en la violencia sexual. Los estudios revisados confirman que la violencia en etapas tempranas del desarrollo se asocia con un mayor uso de los servicios de salud y de otros recursos, que suponen una importante inversión pública a tener en cuenta. Estos trabajos presentan limitaciones que derivan de los datos incompletos o poco fiables incluidos respecto a la mortalidad y la morbilidad vinculadas a la violencia contra la infancia y que suponen estimaciones variables de sus costes, que oscilan en España de 17 mil millones de euros para las experiencias adversas en la infancia, a cerca de 1.000 millones de euros para la violencia sexual. Es necesario disponer de datos fiables sobre los costes de la violencia en la infancia para tomar decisiones mejor informadas sobre la inversión económica en su prevención y tratamiento, así como concienciar sobre su escala e impacto.

The Social Cost of Violence Against Children and Youth

ABSTRACT

The aim of this narrative review is to analyze, through the estimates made in previous studies, the costs of medical, physical, and mental care, productivity losses, costs for the child protection system, and costs for the criminal justice system of violence against children and youth, with special emphasis on sexual violence. The reviewed studies confirm that violence in early stages of development is associated with greater use of health services and other resources, which represent a significant public investment that must be taken into account. These works have limitations that derive from the incomplete or unreliable data included regarding mortality and morbidity related to violence against children and that imply variable estimates of their costs, which in Spain range from 17 billion euros for adverse childhood experiences to around €1 billion for sexual violence. Reliable data on the costs of violence against children is needed to make better-informed decisions about financial investment in its prevention and treatment, as well as to raise awareness of its scale and impact.

Keywords:

Social cost
Human capital
Violence
Childhood
Victimology

La violencia contra niños, niñas y adolescentes es un problema social, de salud pública y de derechos humanos, con una elevada prevalencia en todos los países del mundo (Stoltenborgh et al., 2015), que afecta a 1 billón de niños y niñas de entre 2 y 17 años al año, según rigurosos estudios de revisión (Hillis et al., 2016).

Se ha demostrado que la violencia en la infancia y, concretamente, la violencia sexual, tiene consecuencias adversas para la salud, física y mental (Maniglio, 2009); consecuencias sociales, con un mayor riesgo de nuevas victimizaciones (Walker et al., 2019), pero también de conducta antisocial y delictiva, criminalidad adulta y comportamiento violento (Papalia et al., 2018); así como consecuencias socioeconómicas, con un peor rendimiento académico (Fry et al., 2018) y laboral, y niveles más bajos de bienestar financiero (Currie y Widom, 2010), que suponen importantes pérdidas de capital humano (Henkhaus, 2022).

Establecer el coste que supone para una determinada sociedad la violencia contra niños, niñas y adolescentes ha sido objeto de estudio en diferentes países desde hace unos años (Ferrara et al., 2015). Desde una perspectiva de economía de salud, es importante entender los costes de la violencia por diversas razones (Gerber-Grote et al., 2015). En primer lugar, conocer los costes del problema permite tomar decisiones mejor informadas sobre la inversión económica en su prevención y tratamiento, así como concienciar sobre su escala e impacto. En segundo lugar, facilita a aquellos que deben implementar políticas públicas situar el gasto invertido en violencia contra la infancia y la adolescencia en el contexto de otros servicios de salud pública. Intentar calcular el coste de este problema también señala aquellas lagunas en nuestro conocimiento en las que necesitamos trabajar para mejorar la evidencia en el futuro.

Las estimaciones del coste económico de la violencia contra la infancia y la adolescencia pueden tomar una perspectiva basada en la prevalencia o un enfoque basado en la incidencia (Haddix et al., 2003). La carga económica basada en la prevalencia refiere a los costes de la violencia incurridos en un período de tiempo de habitualmente un año, para todas las víctimas, independientemente del momento en el que se inició la violencia (véase, más adelante, por ejemplo, el estudio en el Reino Unido de la National Society for the Prevention of Cruelty to Children, Saied-Tessier, 2014). Por el contrario, la carga económica basada en la incidencia representa

los costes totales de por vida que presentan las víctimas de violencia que se produjeron dentro de un período de tiempo establecido, habitualmente, un año (por ejemplo, el estudio en los Estados Unidos de Fang et al., 2012).

Objetivos del Estudio

No existe hasta el momento ningún estudio que haya revisado las publicaciones disponibles sobre los costes de la violencia contra la infancia en los países occidentales y, especialmente, sus costes en Europa. Así, el objetivo de la presente revisión narrativa (Greenhalgh et al., 2018) es analizar aquellos estudios que han presentado, mediante el método de obtención de datos secundarios y las correspondientes estimaciones realizadas (Corso y Fertig, 2010), los costes de atención médica, física y mental, las pérdidas de productividad, los costes para el sistema de protección infantil y los costes para el sistema de justicia penal de la violencia contra la infancia y la adolescencia, con especial énfasis en la violencia sexual. En el presente estudio se ha usado una definición amplia de violencia sexual, incluyendo todas las conductas sexuales que tienen como víctima a una persona menor de 18 años. Se ha optado por el término ‘violencia sexual’ en lugar de ‘abuso sexual’ dado que, desde el 6 de octubre de 2022, fecha en la que entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022, no existe este delito en el Código Penal español. Sin embargo, dado el extenso uso del término ‘abuso sexual’ en la literatura, podrá ser usado en ocasiones, especialmente, cuando sea el término utilizado en los estudios revisados. A continuación, la *Tabla 1* ejemplifica estos costes y los datos secundarios a obtener (Sethi et al., 2013).

Cabe destacar que algunos de los costes analizados en los estudios son directos, es decir, se encuentran asociados con los servicios y recursos de atención destinados a los niños y niñas víctimas, como los costes de atención sanitaria y servicios médicos, los costes de programas de intervención familiar o acogimiento residencial y/o familiar como resultado de la violencia. También se presentan costes indirectos que no son aplicados en una atención inmediata pero que derivan de los efectos negativos de la violencia sexual a largo plazo, ya sea por la implicación de las víctimas en conductas antisociales y delictivas, así como por las necesidades de

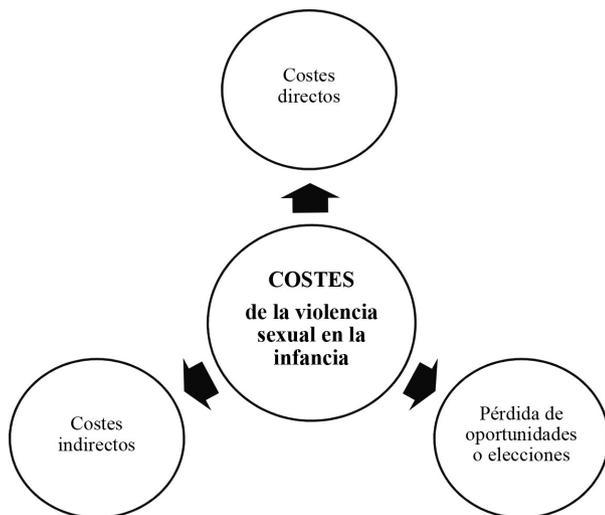
Tabla 1
Costes a Evaluar y Posibles Fuentes de Datos

Costes a corto plazo	Costes a largo plazo	Fuente de los datos a obtener
Utilización de los servicios de salud (número de pacientes internos, número de pacientes externos, datos de diagnósticos, datos de medicación)	Mayor frecuencia de uso de los servicios de salud (por secuelas crónicas (depresión, drogas/alcohol, obesidad, etc.))	Servicios públicos de salud (centros de atención primaria, servicios de medicina especializada (psiquiatría, pediatría etc.))
Pérdidas de productividad (pérdida de días de escuela para los niños y niñas, descenso en notas y rendimiento académico, pérdida de días de trabajo para los padres)	Pérdidas de productividad (mayor abandono escolar, menor frecuencia de estudios superiores, mayor desempleo, menor satisfacción laboral, más bajas laborales)	Servicio público de empleo estatal, programa de garantía juvenil
Servicios de protección infantil (costes de investigación de los casos, costes de los casos en acogimiento en familia extensa, acogimiento en familia ajena, acogimiento residencial)	Mayor frecuencia de uso de los servicios sociales (más prestaciones económicas, más solicitudes de apoyo, atención en centros de día, atención en centros residenciales)	Servicios sociales, recursos dependientes del sistema de protección infantil
Sistema de justicia pena (costes policiales, costes judiciales)	Mayor victimización por violencia (violencia de pareja, violencia sexual) Mayor perpetración de violencia (detenciones, juicios, ingresos en centros de justicia juvenil o prisión)	Datos judiciales públicos, institutos nacionales de estadística
Mortalidad (datos de suicidio)	Mortalidad (datos de suicidio, muertes prematuras)	Institutos nacionales de estadística, datos del sistema de salud

Nota. Elaboración propia a partir de (Sethi et al., 2013).

atención médica derivadas de secuelas físicas y psíquicas. El tercer tipo de costes son los de oportunidad, o de elecciones perdidas, al perder las víctimas la capacidad de tomar las mejores decisiones para su vida como resultado del daño emocional o físico resultante del abuso. Ejemplos de estos costes son el desempleo, un bajo rendimiento laboral y los ingresos fiscales perdidos derivados (Conrad, 2006). Desde un enfoque de capital humano estos costes de oportunidad reflejan potenciales pérdidas de productividad derivadas de la violencia en la infancia que deben ser también tenidas en cuenta (Henkhaus, 2022) (Figura 1).

Figura 1
Tipos de Costes Asociados a la Violencia Sexual Durante la Infancia



El propósito de este trabajo no es intentar capturar cómo y en qué aspectos la violencia y, en concreto, la violencia sexual, afecta a cada individuo víctima. Existen importantes revisiones sistemáticas que han tratado este tema, incluyendo el daño causado por la victimización por acoso o bullying (Montes et al., 2022; Moore et al., 2017) y por el ciberacoso (John et al., 2018), la victimización online (Gardella et al., 2017), el maltrato infantil y la negligencia por parte de los cuidadores principales (Leeb et al., 2011; Norman et al., 2012), el abuso sexual (Irish et al., 2010; Maniglio, 2009), la exposición a la violencia entre los padres (Wood y Sommers, 2011) y la exposición a violencia comunitaria (Lynch, 2003). El objetivo del presente estudio es usar la literatura académica existente para presentar una cifra aproximada de cuánto cuesta la violencia en la infancia a las víctimas, y a la sociedad en su conjunto, aproximando al profesional de la psicología a esta realidad que tiene implicaciones para el psicólogo clínico y de la salud, pero también para el educativo y del desarrollo, el forense, ocupacional y el social.

Resultados

Uno de los primeros y más rigurosos trabajos que ha analizado los costes de la violencia contra la infancia es el de Fang et al. (2012). Según este estudio, la carga económica de por vida de la violencia contra la infancia y la adolescencia resultante de 579.000 nuevos casos de violencia no fatal y 1.740 casos de violencia con

resultado de muerte en los Estados Unidos en 2008 es de, aproximadamente, 124 mil millones de dólares. De media, el coste de por vida se estima en más de 210.000 dólares por víctima de violencia no fatal y 1,3 millones de dólares por víctima con resultado de muerte. Los costes incluidos refieren a atención médica, a corto y largo plazo, pérdidas de productividad y bienestar infantil, justicia penal y costes de educación especial. Los autores concluyen que, incluso desde una perspectiva muy conservadora, al compararse con otros problemas de salud, la carga económica de la violencia contra la infancia es sustancial, y requiere de recursos para su prevención y tratamiento especializado.

Mediante un estudio de revisión sistemática con muestras norteamericanas y europeas, De Bellis et al. (2019) encontraron que los costes anuales financieros y de salud atribuibles a experiencias adversas en la infancia (ACE) se estimaban en 581 mil millones de dólares en Europa y 748 mil millones de dólares en Norteamérica. El término ACE refiere a varios factores de alta intensidad emocional que pueden afectar a los niños y niñas en su desarrollo como son las experiencias de victimización (maltrato infantil, exposición a violencia familiar y comunitaria) o situaciones familiares estresantes, como el abuso de sustancias por parte de los padres o cuidadores principales (Anda et al., 2010). La exposición a estos factores puede influir en el desarrollo neurológico, biológico y social del niño o niña y aumentar el riesgo de presentar dificultades sociales (por ejemplo, un bajo nivel educativo), comportamientos perjudiciales para la salud (como puede ser fumar), y diagnósticos de enfermedades mentales y físicas a lo largo de la vida (Hughes et al., 2017).

Recientemente, Hughes et al. (2021) han estimado la carga económica anual vinculada a estas experiencias adversas en la infancia para 28 países europeos, incluyendo España. Los costes de salud anuales asociados a las ACE van desde 0,1 mil millones de dólares en Montenegro a 129 mil millones de dólares en Alemania. Según esta revisión, para España los costes vinculados a las experiencias adversas en la infancia suponen el 1,2% del producto interior bruto del país o unos 17 mil millones de dólares. De forma similar, en Alemania, el estudio de Habetha et al. (2012) mostró que el trauma derivado de la violencia contra la infancia y la adolescencia es un problema económico relevante, estimando sus costes anuales entre 11 mil millones y 30 mil millones de euros para la población alemana. En Italia, un estudio publicado por l' *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*, Cismai y Fondazione Terre des Hommes Italia (2015), basado en el informe oficial de datos informados en 2010 por el Ministerio de Salud italiano, reportó la existencia de un total de 100.231 niños y niñas maltratados en Italia en un año y 13 mil millones de euros de costes relacionados con el maltrato, incluyendo costes directos e indirectos. Los costes directos referían a hospitalización (50 millones), atención en salud mental (21 millones), servicios de protección y residenciales (164 millones), acogimiento familiar (13 millones), trabajo social profesional (38 millones), y justicia juvenil (53 millones). A su vez, los costes indirectos incluidos referían a educación especial infantil (210 millones), delincuencia juvenil y de adultos (690 millones), atención médica para adultos (326 millones) y pérdida de productividad (6.600 millones).

La violencia sexual es una forma específica de violencia contra la infancia con particularidades y características diferenciales, que justifican un análisis propio de sus costes. Existen cinco

publicaciones hasta el momento que han analizado el impacto socioeconómico específico de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y España.

Uno de los pocos estudios centrado en los costes económicos vinculados a la experiencia de abuso sexual en la infancia es el de [Miller et al. \(1996\)](#) para el National Institute of Justice en los Estados Unidos. Los autores estimaron los costes de esta experiencia en 125.000 dólares por víctima. Los costes anuales relacionados con el abuso sexual se situaron en 23 mil millones de dólares, y se vincularon a pérdidas de productividad, atención médica/ambulancia, salud mental, servicios de policía/bomberos, servicios sociales/para las víctimas, así como pérdida de calidad de vida.

[Letourneau et al. \(2018\)](#), también en los Estados Unidos, estimaron el coste medio del abuso sexual en la infancia desde una perspectiva social a partir de datos secundarios obtenidos de los servicios de atención médica (incluyendo salud física y mental), pérdidas de productividad, costes del sistema de bienestar infantil, costes de violencia/crimen, costes de educación especial y costes de muerte por suicidio, así como, pérdida de calidad de vida. Los autores estimaron 20 nuevos casos de abuso sexual infantil fatales, con resultado de muerte del niño, y 40.387 nuevos casos confirmados no fatales en 2015, situando la carga económica de por vida del abuso sexual en aproximadamente 9,3 mil millones de dólares. El coste para las víctimas de abuso sexual fatal fue de 1,1 millones de dólares para las mujeres y 1,5 millones de dólares para los hombres, aproximadamente. A su vez, para las víctimas de abuso sexual infantil no fatal, de sexo femenino, se estimó un coste promedio de por vida de cerca de 300 mil dólares por víctima. Para las víctimas masculinas de abuso sexual infantil no fatal no hubo información suficiente sobre pérdidas de productividad, lo que contribuye a un promedio más bajo estimado en cerca de 75 mil dólares de por vida. Los autores atribuyen las divergencias con los resultados de estudios anteriores con muestras estadounidenses al uso de diferentes metodologías que imposibilitan la comparativa. Los hallazgos de [Letourneau et al. \(2018\)](#) ofrecen una evaluación más contemporánea del coste de la violencia sexual que incorpora tanto una evaluación completa de las pérdidas de productividad, así como una estimación más conservadora de los casos nuevos.

Otro estudio también centrado en violencia sexual es el de [Hankivsky y Draker \(2003\)](#), en Canadá. Los autores estimaron la carga monetaria resultante de experiencias actuales o previas de abuso sexual infantil en el año fiscal 1997-1998. Se analizaron los costes directos, vinculados a salud (1,72 mil millones de dólares), servicios públicos y sociales (914 millones de dólares), justicia (472 millones de dólares) y educación/investigación y empleo (13 millones de dólares), y los costes indirectos, de morbilidad (476 millones de dólares) y mortalidad (100 millones de dólares), del abuso sexual infantil, calculando que éstos excedían los 3,6 mil millones de dólares anuales. Los autores, sin embargo, advierten que estas estimaciones sólo pueden considerarse los costes mínimos anuales del abuso sexual infantil en Canadá. A su vez, el estudio también subraya la necesidad de incluir la voz de las víctimas en cualquier política dirigida a mejorar la prevención y la intervención ante el problema y reducir los costes sociales asociados al mismo.

En Europa, el estudio de [Saied-Tessier, 2014](#) en el Reino Unido ha informado del coste total del abuso sexual infantil para todas las víctimas, actuales y pasadas, en un año, situándolo entre 1,6 y

3,2 mil millones de libras esterlinas en 2012-2013. Los costes que se incluyen fueron seleccionados basándose en una revisión de la literatura sobre los efectos a corto y largo plazo del abuso sexual infantil. Esto incluye los costes del sistema de justicia penal vinculados a la implicación de la policía, los juzgados y los servicios penitenciarios para los perpetradores de abuso sexual infantil, y también algunas víctimas de abuso sexual infantil que cometen delitos (149 millones); servicios de protección infantil, que incluyen los costes de la evaluación del caso, así como los derivados de la atención en familias de acogida o centros residenciales (124 millones); servicios de salud mental, centrados en el tratamiento de la depresión infantil (1,6 millones); gastos hospitalarios derivados de los ingresos por suicidio infantil y autolesiones (1,9 millones); servicios de salud mental para adultos, centrados en la depresión y el estrés postraumático, y servicios de salud física para adultos, centrados en el abuso de alcohol y drogas (178 millones) y pérdida de productividad, relacionada con el hecho de que las víctimas de abuso sexual infantil tienen menos probabilidades de estar trabajando y es probable que estén ganando salarios más bajos que si no hubieran vivido esta experiencia, ya sea por un rendimiento académico más bajo y/o por problemas de salud mental, así como por dificultades interpersonales vinculadas a la formación y el mantenimiento de relaciones (2,7 mil millones).

Finalmente, en España, la [Fundación EDUCO \(2018\)](#) ha llevado a cabo un análisis cuyo objetivo ha sido realizar una primera aproximación a la estimación del impacto económico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, identificar las lagunas de información y poner en evidencia una cuantificación posible de sus costes a partir de los datos disponibles actualmente. Los autores defienden centrarse únicamente en la violencia sexual dado que, sin ser la forma de violencia más frecuente en la infancia, sí es la que más se repite en el tiempo. Así, desde un enfoque de prevalencia, se han determinado, por un lado, los costes en el año 2015 como respuesta directa a los casos de abuso sexual declarados y, por otro lado, los costes en ese mismo año correspondientes a las personas que se estima que han sufrido abusos sexuales con anterioridad. Se incluyen en el informe, por tanto, 3.919 casos denunciados y 97.415 casos estimados no denunciados. Teniendo en cuenta que se presenta una cifra de mínimos, siguiendo la literatura sobre el tema, se han clasificado los costes de la violencia en cuatro grandes grupos: costes sanitarios, relativos a ingresos hospitalarios, costes derivados de las consecuencias físicas del abuso sexual, visitas a urgencias, costes relacionados con problemas de salud crónicos, entre otros (850 millones de euros); costes educativos, incluyendo los costes de absentismo escolar, repeticiones de cursos académicos, necesidad de servicios especiales en el aula, bajo rendimiento y fracaso escolar (4 millones de euros); costes judiciales, relativos a los procedimientos judiciales y los servicios penitenciarios para los perpetradores (70 millones de euros); y, finalmente, los costes de servicios y prestaciones sociales, que incluyen los servicios de acogimiento residencial y familiar, (56 millones de euros). Se estima que la violencia sexual contra la infancia en España cuesta a la sociedad 979 millones por año, siendo conscientes que sólo es el coste de la violencia sexual y que únicamente es el coste de las consecuencias medibles y de las que se dispone de datos.

La [Tabla 2](#) muestra un resumen de los resultados de los diferentes estudios sobre los costes de la violencia sexual.

Tabla 2

Resumen de los Resultados Obtenidos en los Diferentes Estudios Sobre los Costes del Abuso Sexual Infantil

Estudio	País	Coste estimado
Miller et al. (1996)	EUA	23 mil millones de dólares
Letourneau et al. (2018)	EUA	9,3 mil millones de dólares
Hankivsky & Draker (2003)	Canadá	3,6 mil millones de dólares
Saied-Tessier (2014)	Reino Unido	3,2 mil millones de libras
EDUCO (2018)	España	979 millones de euros

Discusión

En la presente revisión se ha realizado un resumen de los principales estudios publicados en Europa y Norteamérica sobre el impacto económico de la violencia contra la infancia y la adolescencia y, concretamente, se han analizado los escasos trabajos disponibles sobre los costes de la violencia sexual. En todos los estudios se confirma que la violencia en etapas tempranas del desarrollo se asocia con un mayor uso de los servicios de salud y de otros recursos, que suponen una importante inversión pública a tener en cuenta. Las estimaciones de los costes económicos de la violencia contra la infancia y la adolescencia ayudan a llamar la atención sobre este importante problema de salud pública a partir de su impacto en el individuo y en la sociedad y, por lo tanto, alertan sobre la necesidad de invertir en la prevención del mismo, dado que incide incluso en aquellos que no se sienten directamente afectados por el problema (Corso y Fertig, 2010).

Conocer los costes socioeconómicos de la violencia contra la infancia y la adolescencia es una necesidad si se quieren desarrollar modelos económicos adecuados destinados a mejorar la salud de los niños y niñas, en el marco de los derechos de protección, prevención, provisión, promoción, y participación enfatizados por el Consejo de Europa (Gerber-Grote et al., 2015). A pesar de la complejidad de desarrollar estas estimaciones, y las limitaciones que se encuentran en los diferentes estudios, los análisis económicos son invaluable para resaltar el impacto de la violencia contra la infancia y la adolescencia en la sociedad y orientar las políticas para mejorar su prevención (Corso y Fertig, 2010). Se necesitan más estudios científicos sobre la carga y los costes de la violencia contra la infancia y la adolescencia, así como sobre los beneficios de prevenir esta violencia si la prioridad de un país es implementar políticas públicas basadas en la evidencia (Sethi et al., 2013).

Existe un imperativo moral para que la sociedad haga todo lo posible para prevenir y tratar la violencia contra la infancia y el argumento económico sólo busca complementar este fuerte imperativo (Saied-Tessier, 2014) e instar a los gobiernos a invertir en intervenciones preventivas. Incluso teniendo en cuenta lo elevado de estos costes económicos, es fundamental reconocer que son estimaciones conservadoras y que es imposible calcular el impacto del dolor, sufrimiento y reducción de la calidad de vida que experimentan las víctimas de violencia en la infancia. Estas pérdidas intangibles, aunque difíciles de cuantificar en términos monetarios, son reales y no deben pasarse por alto. Nunca podremos conocer la pérdida que supone que niños y niñas no se desarrollen plenamente y que no alcancen su completo potencial. Las pérdidas intangibles, de hecho, pueden representar el mayor componente del coste de la violencia contra los niños y niñas y deberían también tenerse en cuenta al asignar recursos (Wang y Holton, 2007).

A su vez, el impacto de la violencia en la infancia y, concretamente, de la violencia sexual, es mucho mayor que sus

consecuencias iniciales y los costes resultantes de las mismas. El hecho que los efectos de la violencia sexual perduren en el tiempo (Pereda, 2010) significa que hay costes continuos para el individuo, a lo largo de su vida, así como para la sociedad. Es importante señalar que lo que valoramos en términos de calidad de vida, salud y bienestar a menudo desafía el valor y los cálculos económicos. Esto hace que capturar todos los costes reales del abuso sexual en la infancia sea muy difícil, si no imposible.

Identificar los medios más efectivos y eficientes de brindar programas y recursos de prevención e intervención en el área de la violencia contra la infancia conduciría a un importante ahorro de costes para la sociedad en términos de gastos de atención médica, servicios sociales y justicia (Hankivsky y Draker, 2003). Pero más allá de cualquier ahorro financiero se encuentran los beneficios de las intervenciones preventivas para los niños, niñas y jóvenes víctimas, los supervivientes adultos, las familias y la sociedad en general.

En síntesis, los costes económicos presentados en esta revisión son sólo una contabilidad parcial y conservadora de este problema social, de salud y de violación de derechos, complejo y multidimensional. Incluso estas estimaciones preliminares muestran que la violencia contra la infancia y la adolescencia conlleva enormes costes para las víctimas, para sus familias y para la sociedad. Por lo tanto, la presente revisión supone un recurso valioso a utilizar por aquellos que deben incidir en las políticas públicas y dar respuesta a la demanda social ante la violencia contra la infancia.

Limitaciones de los Estudios

Los estudios revisados presentan limitaciones importantes que derivan, principalmente, de los datos incompletos o poco fiables incluidos respecto a la mortalidad y la morbilidad vinculadas a la violencia contra la infancia y que suponen estimaciones variables de sus costes, que oscilan en España de 17 mil millones de euros, aproximadamente, para las experiencias adversas en la infancia, a cerca de 1.000 millones de euros para la violencia sexual.

En primer lugar, existe una necesidad urgente de datos fiables y válidos que provengan de encuestas comunitarias anuales que permitan establecer la dimensión real de la violencia contra la infancia y la adolescencia en un determinado país, mediante herramientas estandarizadas que faciliten la comparativa internacional (Sethi et al., 2013). En España, actualmente, contamos con un único estudio de abuso sexual infantil de alcance nacional (López et al., 1995) y estudios puntuales cuyos resultados permiten conocer la prevalencia de diferentes formas de violencia contra la infancia (Indias y de Paúl, 2017; Játiva y Cerezo, 2014; Pereda et al., 2014). Llevar a cabo una encuesta nacional, repetida en el tiempo, que permita establecer la incidencia anual de la violencia, así como observar posibles variaciones en función de la implementación de programas de prevención en determinadas regiones, es un primer paso a tener en cuenta en las políticas públicas de nuestro país.

También es posible usar los casos conocidos oficialmente por los servicios de protección infantil o las denuncias de violencia contra la infancia notificadas a las fuerzas de seguridad para establecer una línea base desde la que estimar las consecuencias de ésta, desde una perspectiva conservadora y situada en el límite inferior de la carga económica total real. Sin embargo, esto puede

ser problemático dado que en muchos países no existe un mecanismo de identificación y de registro de casos de violencia contra la infancia y la adolescencia en los servicios de protección ni en las fuerzas de seguridad, y, además, muchos casos no son detectados ni reportados a las autoridades (Pereda et al., 2016) lo que infraestima la realidad del problema.

A su vez, urge disponer de datos rigurosos provenientes de los diversos sistemas que trabajan con niños, niñas y adolescentes y de los servicios de atención a víctimas de la violencia, como el sistema educativo y los servicios de salud, física y mental, el sistema de protección infantil y los servicios sociales, o la justicia penal. Estos datos pueden obtenerse de los casos conocidos por los propios servicios cuyos costes se quieren estimar. En España, nuevamente, esto puede ser problemático dado que los diferentes servicios no recogen información de las experiencias de victimización de la persona que acude a ellos siendo imposible saber cuántas personas que se suicidan fueron víctimas de violencia en su infancia, o cuántas personas en prisión sufrieron esta experiencia.

Cabe añadir que establecer vínculos causales de la violencia en la infancia con ciertos efectos nocivos a largo plazo, como el aumento de comportamientos de riesgo, la actividad delictiva o la victimización crónica y la perpetración de violencia, es aun más problemático y, sólo pueden llevarse a cabo estimaciones aproximadas, como las presentadas en esta revisión que no pretenden ser exhaustivas sino mostrar la gravedad de un problema, con efectos económicos importantes para la sociedad, más allá del daño causado a sus víctimas.

La aprobación de la **Ley Orgánica 8/2021**, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia se constituye como un avance normativo que puede contribuir a dar respuesta a algunas de estas limitaciones, mediante la implicación de la universidad española en la realización de estudios sobre este problema (art. 36 y 37), o la creación de un Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI) (art. 44), entre otros.

Conclusiones

La prevención del maltrato infantil debe convertirse en una prioridad dentro de los programas educativos, de salud y protección infantil en todo el mundo (Ferrara et al., 2015). Así, la frecuencia y gravedad de las consecuencias de la violencia contra la infancia y la adolescencia, que incluye un importante coste económico, no sólo para sus víctimas directas, sino para la sociedad en su conjunto, justifican una mayor inversión en medidas preventivas y terapéuticas basadas en la evidencia (Gilbert et al., 2009).

Conflicto de Intereses

La autora declara que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con el artículo.

Referencias

- Anda, R. F., Butchart, A., Felitti, V. J., & Brown, D. W. (2010). Building a framework for global surveillance of the public health implications of adverse childhood experiences. *American Journal of Preventive Medicine*, 39(1), 93-98. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2010.03.015>
- Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza - Cismai - Fondazione Terre des Hommes Italia (2015). *Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia*. Véase <https://terredeshommes.it/dnload/Indagine-Maltrattamento-bambini-TDH-Cismai-Garante.pdf>
- Bellis, M. A., Hughes, K., Ford, K., Rodriguez, G. R., Sethi, D., & Passmore, J. (2019). Life course health consequences and associated annual costs of adverse childhood experiences across Europe and North America: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Public Health*, 4(10), e517-e528. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(19\)30145-8](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(19)30145-8)
- Conrad, C. (2006). Measuring costs of child abuse and neglect: A mathematic model of specific cost estimations. *Journal of Health and Human Services Administration*, 29(1), 103-123.
- Corso, P. S., & Fertig, A. R. (2010). The economic impact of child maltreatment in the United States: Are the estimates credible? *Child Abuse & Neglect*, 34(5), 296-304. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2009.09.014>
- Currie, J., & Widom, C. S. (2010). Long-term consequences of child abuse and neglect on adult economic well-being. *Child Maltreatment*, 15(2), 111-120. <https://doi.org/10.1177/1077559509355316>
- EDUCO (2018). *Los costes de la violencia contra la infancia. Impacto económico y social*. Educo.
- Fang, X., Brown, D. S., Florence, C. S., & Mercy, J. A. (2012). The economic burden of child maltreatment in the United States and implications for prevention. *Child Abuse & Neglect*, 36(2), 156-165. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2011.10.006>
- Ferrara, P., Corsello, G., Basile, M. C., Nigri, L., Campanozzi, A., Ehrlich, J., & Pettoello-Mantovani, M. (2015). The economic burden of child maltreatment in high income countries. *The Journal of Pediatrics*, 167(6), 1457-1459. <https://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2015.09.044>
- Fry, D., Fang, X., Elliott, S., Casey, T., Zheng, X., Li, J., Florian, L., & McCluskey, G. (2018). The relationships between violence in childhood and educational outcomes: A global systematic review and meta-analysis. *Child Abuse & Neglect*, 75, 6-28. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.06.021>
- Gardella, J. H., Fisher, B. W., & Teurbe-Tolon, A. R. (2017). A systematic review and meta-analysis of cyber-victimization and educational outcomes for adolescents. *Review of Educational Research*, 87(2), 283-308. <https://doi.org/10.3102/0034654316689136>
- Gerber-Grote, A., Lenton, S., Amelung, V., Pettoello-Mantovani, M., & Ehrlich, J. (2015). Starting the debate on the role of health economics to support child friendly health care in Europe. *The Journal of Pediatrics*, 167(4), 944-945. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2015.06.056>
- Gilbert, R., Widom, C. S., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E., & Janson, S. (2009). Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. *The Lancet*, 373(9657), 68-81. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)61706-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61706-7)
- Greenhalgh, T., Thorne, S., & Malterud, K. (2018). Time to challenge the spurious hierarchy of systematic over narrative reviews? *European Journal of Clinical Investigation*, 48(6), e1293. <https://doi.org/10.1111/eci.12931>
- Habetha, S., Bleich, S., Weidenhammer, J., & Fegert, J. M. (2012). A prevalence-based approach to societal costs occurring in consequence of child abuse and neglect. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 6, 1-10. <https://doi.org/10.1186/1753-2000-6-35>
- Haddix, A. C., Teutsch, S. M., & Corso, P. S. (Eds.). (2003). *Prevention effectiveness: A guide to decision analysis and economic evaluation*. Oxford University.

- Hankivsky, O., & Draker, D. A. (2003). The economic costs of child sexual abuse in Canada: A preliminary analysis. *Journal of Health & Social Policy, 17*(2), 1-33. https://doi.org/10.1300/J045v17n02_01
- Henkhaus, L. E. (2022). The lasting consequences of childhood sexual abuse on human capital and economic well-being. *Health Economics, 31*(9), 1954-1972. <https://doi.org/10.1002/hec.4557>
- Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global prevalence of past-year violence against children: A systematic review and minimum estimates. *Pediatrics, 137*(3), e20154079. <https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079>
- Hughes, K., Bellis, M. A., Hardcastle, K. A., Sethi, D., Butchart, A., Mikton, C., Jones, L., & Dunne, M. P. (2017). The effect of multiple adverse childhood experiences on health: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Public Health, 2*(8), e356-e366. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(17\)30118-4](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(17)30118-4)
- Hughes, K., Ford, K., Bellis, M. A., Glendinning, F., Harrison, E., & Passmore, J. (2021). Health and financial costs of adverse childhood experiences in 28 European countries: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Public Health, 6*(11), e848-e857. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(21\)00232-2](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00232-2)
- Indias García, S., & Paul Ochotorena, J. de (2017). Lifetime victimization among Spanish adolescents. *Psicothema, 29*(3), 378-383. <https://doi.org/10.7334/psicothema2016.342>
- Irish, L., Kobayashi, I., & Delahanty, D. L. (2010). Long-term physical health consequences of childhood sexual abuse: A meta-analytic review. *Journal of Pediatric Psychology, 35*(5), 450-461. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsp118>
- Játiva, R., & Cerezo, M. A. (2014). The mediating role of self-compassion in the relationship between victimization and psychological maladjustment in a sample of adolescents. *Child Abuse & Neglect, 38*(7), 1180-1190. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.04.005>
- John, A., Glendinning, A. C., Marchant, A., Montgomery, P., Stewart, A., Wood, S., Lloyd, K., & Hawton, K. (2018). Self-harm, suicidal behaviours, and cyberbullying in children and young people: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research, 20*(4), e9044. <https://doi.org/10.2196/jmir.9044>
- Leeb, R. T., Lewis, T., & Zolotor, A. J. (2011). A review of physical and mental health consequences of child abuse and neglect and implications for practice. *American Journal of Lifestyle Medicine, 5*(5), 454-468. <https://doi.org/10.1177/1559827611410266>
- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 05 de junio de 2021. «BOE» núm. 134.
- Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. 07 de septiembre de 2022. «BOE» núm. 215.
- Letourneau, E. J., Brown, D. S., Fang, X., Hassan, A., & Mercy, J. A. (2018). The economic burden of child sexual abuse in the United States. *Child Abuse & Neglect, 79*, 413-422. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.02.020>
- Lynch, M. (2003). Consequences of children's exposure to community violence. *Clinical Child and Family Psychology Review, 6*, 265-274. <https://doi.org/10.1023/B:CCFP.0000006293.77143.e1>
- López, F., Carpintero, E., Hernández, A., Martín, M. J., & Fuertes, A. (1995). Prevalencia y consecuencias del abuso sexual al menor en España. *Child Abuse & Neglect, 19*(9), 1039-1050. [https://doi.org/10.1016/0145-2134\(95\)00066-H](https://doi.org/10.1016/0145-2134(95)00066-H)
- Maniglio, R. (2009). The impact of child sexual abuse on health: A systematic review of reviews. *Clinical Psychology Review, 29*(7), 647-657. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.08.003>
- Miller, T. R., Cohen, M. A., & Wiersema, B. (1996). *Victim costs and consequences: A new look*. U.S. Department of Justice. Office of Justice Programs. National Institute of Justice.
- Montes, Á., Sanmarco, J., Novo, M., Cea, B., & Arce, R. (2022). Estimating the psychological harm consequence of bullying victimization: A meta-analytic review for forensic evaluation. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 19*(21), 13852. <https://doi.org/10.3390/ijerph192113852>
- Moore, S. E., Norman, R. E., Suetani, S., Thomas, H. J., Sly, P. D., & Scott, J. G. (2017). Consequences of bullying victimization in childhood and adolescence: A systematic review and meta-analysis. *World Journal of Psychiatry, 7*(1), 60-76. <https://doi.org/10.5498/wjpv.7.i1.60>
- Norman, R. E., Byambaa, M., De, R., Butchart, A., Scott, J., & Vos, T. (2012). The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: A systematic review and meta-analysis. *PLoS Medicine, 9*(11), e1001349. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001349>
- Papalia, N., Luebbers, S., & Ogloff, J. R. (2018). Child sexual abuse and the propensity to engage in criminal behaviour: A critical review and examination of moderating factors. *Aggression and Violent Behavior, 43*, 71-89. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.10.007>
- Pereda, N. (2010). Consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual infantil. *Papeles del Psicólogo, 31*(2), 191-201.
- Pereda, N., Abad, J., & Guilera, G. (2016). Lifetime prevalence and characteristics of child sexual victimization in a community sample of Spanish adolescents. *Journal of Child Sexual Abuse, 25*(2), 142-158. <https://doi.org/10.1080/10538712.2016.1123791>
- Pereda, N., Guilera, G., & Abad, J. (2014). Victimization and polyvictimization of Spanish children and youth: Results from a community sample. *Child Abuse & Neglect, 38*(4), 640-649. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.01.019>
- Saied-Tessier, A. (2014). *Estimating the costs of child sexual abuse in the UK*. National Society for the Prevention of Cruelty to Children, NSPCC.
- Sethi, D., Bellis, M., Hughes, K., Gilbert, R., Mitis, F., & Galea, G. (2013). *European report on preventing child maltreatment*. World Health Organization. Regional Office for Europe.
- Stoltenborgh, M., Bakermans-Kranenburg, M. J., Alink, L. R., & IJzendoorn, M. H. van (2015). The prevalence of child maltreatment across the globe: Review of a series of meta-analyses. *Child Abuse Review, 24*(1), 37-50. <https://doi.org/10.1002/car.2353>
- Walker, H. E., Freud, J. S., Ellis, R. A., Fraine, S. M., & Wilson, L. C. (2019). The prevalence of sexual revictimization: A meta-analytic review. *Trauma, Violence, & Abuse, 20*(1), 67-80. <https://doi.org/10.1177/1524838017692364>
- Wang, C. T., & Holton, J. (2007). *Total estimated cost of child abuse and neglect in the United States* (pp. 1-5). Prevent Child Abuse America.
- Wood, S. L., & Sommers, M. S. (2011). Consequences of intimate partner violence on child witnesses: A systematic review of the literature. *Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 24*(4), 223-236. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6171.2011.00302.x>